DIARIO

DE LAS

SESIONES DE CORTES.

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.

PRESIDENCIA DEL SEÑOR OLIVER.

SESION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1822.

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior.

Se dió cuenta de una exposicion de la Diputacion provincial de Valladolid, dirigida á pedir á las Córtes se sirviesen declarar si los prófugos con motivo del alistamiento para el reemplazo del ejército que sean aprehendidos por los pueblos, podrán servir para llenar el cupo de estos cuando no los reclamen los de su naturaleza. Las Córtes acordaron que esta exposicion pasase á la comision de Guerra para que exponga su dictámen.

A la misma se mandó tambien pasar otra exposicion de D. José María Bregon y D. Pedro Caunedo, en que pedian á las Córtes se sirviesen determinar que se lleve á efecto lo que decretaron las anteriores al aprobar la proposicion de varios Sres. Diputados, relativa al examen y rectificacion de la ordenanza de comisarios, como parte integrante de la militar, en que se halla entendiendo actualmente el Congreso.

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa-

cho de Gracia y Justicia, con el cual acompañaba ejemplares de la ley por la que se suprimen los conventos y monasterios sitos en despoblado ó en pueblos que no excedan de 450 vecinos. Las Córtes quedaron enteradas, y acordaron que los ejemplares se repartiesen á los Sres. Diputados.

Por el Ministerio de Hacienda se remitió una instancia de varios vecinos de la ciudad de Cádiz, interesados en los préstamos hechos por aquella plaza al Gobierno en 1797 y 1805, pidiendo á S. M. se sirviese autorizar á las presentes Córtes extraordinarias para que pudiesen resolver el expediente que quedó sin determinar en la legislatura última ordinaria por falta de tiempo, á cuya solicitud habia accedido el Rey, por mediar en ello el bienestar de muchas familias menesterosas. Las Córtes acordaron que pasase este negocio con los antecedentes á las comisiones reunidas de Visita del crédito publico y de Comercio, que habian informado anteriormente sobre el expediente principal.

A la de Hacienda se mandó asimismo pasar otro ex-

pediente que remitía el mismo Secretario del Despacho, promovido en la intendencia de Soria por Benito Catalina, dependiente del extinguido resguardo de aquella provincia y actualmente soldado del ejército, en que reclamaba la tercera parte de su sueldo, cuya gracia está concedida por punto general á los empleados de Hacienda, según Reales instrucciones, y particularmente por la Real orden de 30 de Julio de 1820, por la cual se dispone que los dependientes de los resguardos á quienes tocara la suerte de soldado, deban percibir las dos terceras partes de sus respectivos haberes sin deducción ni descuento alguno; cuya resolución decia el Gobierno que si se llevase á efecto, podria irrogar crecidos desembolsos al Erario público; por lo cual proponia se acordase una resolución que sirva de regla general para todos los empleados de la Hacienda pública.

Continuando la discusion de las ordenanzas militares, presentó la comision de Guerra el capitulo 2.º del título 5.º, que trata de los testamentos militares, reformado en los términos siguientes:

TÍTULO V.

CAPÍTULO II.

De los testamentos militares.

Artículo 1.º Todo militar en activo servicio podrá testar en papel comun á presencia de dos testigos y sin los demás requisitos que las leyes exigen para la validacion del testamento.

Art. 2.º En el actual conflicto de un combate ó sobre el inmediato caso de empezarlo, ó bien en un naufragio ó cualquier otro eminente riesgo, el militar podrá testar como quisiere ó pudiere: si lo ejecutare por escrito, podrá hacerlo sin testigos, siendo válida la declaracion de su voluntad, como conste ser suya la letra del escrito ó al menos la firma si estuviere de mano ajena: si lo hiciere de palabra, se estará á la deposicion de dos testigos que declaren sobre su última voluntad.

Art. 3.º Los militares que hicieren su testamento, bien sea de palabra ó por escrito, en uso del derecho concedido por los dos artículos precedentes, y sin guardar las formalidades comunes á los demás ciudadanos, procurarán sin embargo no omitir en él la declaracion de su nombre, filiacion, estado, deudas y créditos con los nombres de sus deudores y acreedores, bienes muebles y raices, sueldos devengados y ropas; expresarán asimismo los herederos que instituyen y albaceas que nombran, especificando tambien los hijos legítimos ó naturales que tengan y la patria y residencia de todos, con lo demás que les ocurra y convenga explicar, tanto para evitar pleitos, como para ilustracion de lo que á su prosperidad pueda convenir.

En orden á la parte de bienes de que los militares pueden disponer libremente cuando tenga herederos forzosos, personas que deban sucederles si fallecieren *ab intestato*, y demás reglas concernientes al ejercicio de la facultad de testar y derechos de sucesion, se guardará en un todo lo que las leyes generales tienen prescrito ó en adelante prescribieren, entendiéndose por consiguiente limitada la índole del testamento militar á la dispensacion de las fórmulas comunes en el modo y con la extension de que hablan los artículos 1.º y 2.º de este título,

Art. 4.º El Código militar de procedimientos determinará los requisitos y trámites que deban observarse, así para acreditar la identidad de la firma y disposicion del testador, como para abrir el testamento, si el militar lo hubiese hecho en pliego cerrado.

Art. 5.º Cuando ocurriere el fallecimiento de un militar en activo servicio, el alcalde constitucional del pueblo donde esto sucediere, procederá inmediatamente á practicar las diligencias oportunas á fin de poner en seguridad los bienes y efectos del difunto, y disponer lo que convenga para su entierro y funeral, dando prévio conocimiento por medio de oficio simple al comandante general del distrito si fuere en la capital de la provincia, ó al gobernador militar siendo en plaza de guerra, ó al comandante respectivo si el fallecimiento hubiese acaecido en alguno de los cantones ó cuarteles. En campaña se dará este aviso prévio al general en jefe del ejército.

Art. 6.º El conocimiento ó aviso prévio que debe darse á las autoridades designadas en el artículo anterior, servirá únicamente para que estas comisionen un individuo militar cualquiera, que asistiendo con el alcalde constitucional en el acto del reconocimiento de los bienes y efectos del difunto, recoja bajo el oportuno recibo, que entregará á dicho alcalde, los papeles y documentos de oficio que se hallaren entre los restantes; entendiéndose por papeles y documentos de oficio solo aquellos que digan relacion con la comision ó encargo que por razon de su profesion estuviere desempeñando el difunto, y de ningun modo otros, que aunque sean concernientes á asuntos militares, deban considerarse como propiedad de la persona; por ejemplo, apunte, discurso ó tratado cualquiera sobre táctica, fortificacion, derecho de la guerra, etc., que pueda encontrarse entre sus manuscritos. Los planos y trabajos cuyo descubrimiento perjudique á la causa de la Nacion y ofrezca un auxilio al enemigo, serán recogidos aun cuando no se hubiesen formado ó conservado por razon de oficio.»

Art. 7.º Si el que hubiere fallecido fuere el general en jefe de un ejército, comandante militar de un distrito, gobernador de alguna plaza, jefe de cuerpo ó cualquier otro que ejerza algun mando, encargo ó comision especial de su profesion, deberá concurrir y recoger los papeles de oficio de que trata el artículo precedente, el inmediato jefe ó persona que haya de sucederle próximamente en aquel mando ó comision, con cuyo objeto será á esta precisamente á quien en los casos indicados el alcalde constitucional dará el prévio aviso que se exige por el art. 5.º

Art. 8.º En el caso de que falleciere el intendente ó ministro principal de hacienda del ejército en campaña, se pasará este aviso á la persona que deba encargarse del despacho; siendo por consiguiente de su obligacion el recoger los papeles de oficio en la forma que queda prevenida.

Art. 9.º Las facultades que por el art. 5.º se conceden á los respectivos alcaldes para que procedan á las diligencias que allí se expresan, tendrán lugar, ya sea que el fallecimiento del militar ocurra en campaña ó fuera de ella, con testamento ó *ab intestato*, siempre que sea en pueblo comprendido dentro del territorio español; pero si acaeciere en país extranjero, corresponderá la práctica de dichas diligencias preventivas al auditor general del ejército, con sujecion á lo que se establece en el mismo art. 5.º y en el 6.º, 7.º y 8.º que le subsiguen.

Art. 10. Estas facultades que se atribuyen respec-

tivamente á los alcaldes de los pueblos y auditores generales del ejército, no podrán ejercerse si en el pueblo ó paraje del fallecimiento del militar existieren á la sazón, aunque fuere accidentalmente, su abuelo, padre ó madre, mujer ó hijos mayores de edad que puedan cuidar de los bienes del difunto, en cuyo caso no se practicarán ningunas diligencias preventivas de oficio, salvo siempre el derecho de los respectivos jefes y demás personas mencionadas en los artículos anteriores para reclamar y solicitar los papeles tocantes al servicio; interpellando la autoridad del alcalde constitucional ó del auditor del ejército en su caso para recogerlos inmediatamente, si hubiere alguna resistencia ó se ocultaren maliciosamente por parte de dichas personas allegadas del difunto, las cuales podrán exigir siempre el oportuno recibo.

Art. 11. Lo mismo se observará si habiendo nombrado el testador albaceas, no se hallaren estos ausentes al tiempo de fallecer el primero, bien sea porque residan en el mismo pueblo ó por cualquier otro motivo.

Art. 12. No teniendo otro objeto las diligencias preventivas de que se ha hablado en este capítulo, que ocurrir á la urgencia del caso y asegurar los bienes del militar difunto, no podrá extenderse á más el alcalde ó auditor de ejército que las haya prevenido, y deberá remitirlas inmediatamente que fueren concluidas al juez de primera instancia á quien corresponda, para que proceda con arreglo á derecho, á no ser que antes en cualquier estado de ellas se hubiese presentado alguna de las personas allegadas de que se hace mérito en el art. 11, ó los albaceas del testador, en cuyo caso cesará todo procedimiento de oficio.

Art. 13. Las formalidades con que deban practicarse el inventario, custodia y depósito de los bienes del difunto, y lo que deba hacerse cuando hubiese dejado hijos menores de edad, son objeto de las leyes que arreglen los procedimientos.

Art. 14. El conocimiento de las testamentarias y *ab intestato* de los militares será privativo de los respectivos jueces y tribunales civiles ordinarios, ante los cuales deberán reducir sus acciones los que se crean con derecho á la herencia por cualquier título.»

Leído el art. 1.º, dijo

El Sr. **SANTOS SUAREZ**: Cuando por primera vez se presentó este título á la discusión de las Cortes, y fueron aprobados los artículos 1.º y 2.º, tuve el honor de hacer una adición al 1.º; pero no habiendo manifestado la comisión su dictámen sobre ella, parece que no ha merecido su aprobación. Expondré, pues, las razones que me han movido á hacerla. Indudable como es que por nuestras leyes las formalidades para el otorgamiento de las últimas voluntades no tienen otro objeto que el de asegurar las propiedades de los españoles que fallecen, no puede ser un privilegio para los militares el exonerarlos de estas formalidades en sus testamentos. Enhorabuena que se les exonere, si se quiere, de la de otorgarlos en papel sellado, porque esta no es más que una contribución; pero, Señor, que los individuos del ejército otorguen testamento solo ante dos testigos, no siendo este el número que prescriben las leyes, ¿no es dejar una puerta abierta para que puedan ser defraudadas las últimas voluntades de los militares? Yo, por mi parte, creo que quedarán expuestas á mil fraudes, y tanto más cuanto que los delitos en este caso suelen quedar impunes, porque no es posible que el testador los descubra. Es verdad que aquí se dice que un militar puede hacer testamento en un camino ó en

el campo, donde acaso no se encontrarán mas que estos dos testigos; pero se ocurriría á esto diciendo que los militares podrían hacer testamento en papel blanco y con solos dos testigos cuando no hubiese más, y que se declaraba válido, porque esto es lo que sucede con todos los demás españoles: mas cuando un militar se halla en Madrid, por ejemplo, donde hay la copia necesaria de testigos y de personas que lo autoricen, ¿por qué se ha de dejar abierta esa puerta á los fraudes? Así me parece que el artículo necesita alguna adición.

El Sr. **MORENO**: No es posible que haya Nación que exija tantas formalidades para los testamentos como la antigua Roma; y á pesar de que por cualquier defecto, por pequeño que fuera, se anulaban los testamentos de los ciudadanos romanos cuando no eran militares, sin embargo, eran privilegiados los de estos últimos, otorgados sin las formalidades prevenidas por las leyes. Es indudable, Señor, que la profesión de las armas es incompatible con todas aquellas formalidades requeridas para el testamento de cualquier otro ciudadano: y así yo, lejos de atacar el artículo por falta de formalidades, le atacaría por exigir demasiadas. No obstante, defiende el artículo, porque ya en la ordenanza antigua se decía que todo el que gozase fuere militar pudiera testar en papel blanco y con solos dos testigos: además de que para mí siempre ha sido una cosa durísima que para poner á un reo en el patíbulo hayan de bastar dos testigos, y para otorgar la última voluntad sean necesarios cinco, siete ó más.

El Sr. **SANTOS SUAREZ**: Para deshacer una equivocación. El Sr. Moreno debía advertir que un hombre que va al patíbulo tiene francos y expeditos todos los medios de defensa, y que puede desmentir las imputaciones de los testigos, cosa que no puede suceder en el caso del testamento: de consiguiente, no hay paridad. Otra equivocación es que por la ordenanza antigua estaban autorizados los militares para otorgar testamentos de este modo; pues esto era solo en peligro inminente, como en una batalla ó caso semejante, en que bastaba manifestasen de cualquier modo su voluntad.

El Sr. **GAROZ**: Cuanto ha dicho el Sr. Santos Suarez impugnando el artículo, queda intacto despues de la defensa del Sr. Moreno, y por el mismo motivo y fundamentos insisto yo en su reprobación.

Está fuera de disputa que las formalidades establecidas para acreditar las últimas voluntades sobre las que requieren las leyes en la prueba de los demás hechos de la vida, ya sean contratos, ya sean delitos, ó de otra cualquiera clase, que no terminen á disponer de los bienes para despues de la muerte, no son un gravámen impuesto á los testadores para su perjuicio; son, por el contrario, unas garantías indispensables en beneficio de los que mueren, para que pasen á otra vida con la seguridad de que su última disposición no será fácilmente suplantada ni falsificada. Es preciso hacerse cargo, como ha dicho muy bien el Sr. Santos Suarez, de que si dos testigos bastan para llevar á un español al cadalso por un hecho que testifiquen contra él, todavía se ve muy claro que mientras el hombre vive, puede destruir la deposición de dos y aun de veinte sujetos que contra verdad hayan afirmado un suceso, pero que despues de finado prevalecerá contra su voluntad la que le suponga ó suplante la codicia de un interesado convenido con otros dos en que aseveren ser su última disposición dejarle heredero, á la confianza de partir entre sí los intereses del difunto; y esto es tanto más fácil de suceder entre militares que acompa-

ñan á otro en una campaña ó expedicion ó viaje, pues el artículo pendiente tiene el carácter de dispositivo para todo tiempo.

El Sr. Moreno se congratula de que en este artículo se hayan dispensado las minuciosas fórmulas del derecho romano; pero el gozo de S. S. debe desaparecer si con su ilustracion reflexiona que la legislacion testamentaria de los españoles abolió la rogacion y otras farsas ridículas, y aun la institucion de heredero como requisito legal para los testamentos, y por consiguiente no trae la ventaja que le lisonjea su ánimo; cuando por el contrario, privando á los militares de la seguridad importantísima á todo ciudadano acerca de la ejecucion de su última voluntad, la deja al aire y expuesta á merced de la avaricia, tan osada y ávida de intereses, solo por conservar aquella preocupacion romana de que nadie muera sin testar, porque se hacia infame cualquiera con semejante omision; y por eso se da esa indiscreta facilidad á los militares, á quienes se supone conceder un favor singular en lo que notoriamente se les perjudica.

Cuando yo ví que antes adoptaron las Córtes la base de este artículo, consideré que las habia guiado la idea de conservar á los beneméritos militares los privilegios ó beneficios compatibles con las instituciones, ó que, y esto sería más cierto, porque creyeron que eran acreedores á tener este consuelo con el ahorro de gastos y de diligencias, atendiendo á que sus activas ocupaciones no les prestaban lugar para buscar escribano, etc. Pero en cuanto á lo primero, está evidenciado ser tal franquía en daño trascendentalísimo de los beneméritos militares; y para lo segundo puse una adición, por la que sin necesidad de escribano ni mayor incomodidad en buscar testigos vecinos, etc., pudiesen los militares otorgar sus testamentos ante los jefes militares con testigos militares y de un modo que constase perpétuamente, con una solemnidad particular, que al paso que alejase todo fraude y falsedades, ofreciese mayor facilidad y ningun dispendio á unos actos tan formales é importantes como son los en que un ciudadano determina el destino que se ha de dar á lo que ganó con más riesgo y privaciones que los demás individuos de la Nación.

Se dijo entonces que todas las ordenanzas de Europa conservan el modo de este artículo; pero yo sé y aseguro lo contrario, y no remito á los Sres. Diputados sino al Código francés de Napoleon, de donde yo tomé las ideas de mi adición; ejemplo que cito, porque nadie favoreció más la milicia que ese gran guerrero y déspota. Por todo concluyo desaprobando el artículo.

El Sr. **INFANTE**: Yo dije ayer, cuando se leyó este capítulo, que los artículos 1.º y 2.º estaban aprobados por las Córtes, y que solo habia hecho la comision algunas pequeñas alteraciones para ponerlos en perfecta armonía con los que presenta nuevamente. La comision no sabe si habrá acertado; pero ha tenido la docilidad de oír á personas muy inteligentes en esta materia, y creo que se hayan llenado los deseos de los señores que los impugnaron la otra vez que se presentaron á la discusion. Ya entonces se expusieron las razones que habia habido para concebir el artículo de esta manera, y que las dificultades que se ofrecen de que se hagan los testamentos en papel comun y con solo dos testigos no son aplicables á todos los testamentos, pues sabido es que el testador pondrá su firma y llamará á los testigos que crea conveniente; y así me parece que la letra y firma del testador, más los dos testigos que el artículo

pide, son más que suficientes para probar la verdadera voluntad del testador. Respecto, pues, á que está ya aprobado este artículo por las Córtes, y á que no se ha hecho ahora más que una ligera modificación para ponerlo en armonía con los demás, creo que no debe haber dificultad en votarlo.

El Sr. **SALVATO**: La comision, al extender el presente artículo, ha partido sin duda de un principio falso, cual lo es suponer que la suspension de las formalidades en los testamentos es un beneficio, y que por lo tanto sería oportuno agraciarse con él á los militares. El Congreso sabe muy bien que todas las legislaciones han demarcado ciertos requisitos y solemnidades para que conste en plena forma de las últimas voluntades, y no puedan torcerse las del individuo precisamente en el acto más importante en que dicta la ley á su posteridad; y saben no menos las Córtes que á pesar de esta prevision de parte de los legisladores, se han cometido tales fraudes y suplantaciones, que incesantemente han sido ocupados los tribunales de las contiendas suscitadas en esta materia. De ahí es que el artículo, cual se presenta, dejaria los testamentos de los militares entregados á todos los vicios de la trama y codicia, y sin el apoyo y garantía que deben recibir de la ley como los de los demás ciudadanos; y si puede haber algun caso en que sea lícito á aquellos testar sin las solemnidades de derecho, no debe ser otro que el de un conflicto ó de un lance apurado de la guerra, que no preste absolutamente ocasion ú oportunidad de apelar á las solemnidades comunes.

La ordenanza del ejército, si no me engaño, prescribia á lo menos en los testamentos militares la intervencion del sargento mayor ó teniente coronel mayor; y si bien las leyes del Reino recopiladas les dispensaron de toda formalidad, no puedo avenirme en manera alguna con esta doctrina sino en el único caso de que he hablado. Así, pues, opino contra el artículo en discusion, y ruego á las Córtes que dejen de aprobarlo.»

Pidió el Sr. **Romero** que se leyese el artículo segun estaba en el proyecto impreso; y no estando á mano, dijo

El Sr. **ROMERO**: Es necesario entrar en la historia de los antecedentes que han motivado este debate. Cuando fué aprobado este artículo anteriormente, constaba de dos partes; una en que se establecia un privilegio en favor de los militares para poder testar sin los requisitos que son necesarios á los demás ciudadanos, y otra en que se prevenia que los militares pudiesen gozar de todo lo prevechoso, ó sea de todos los derechos de los españoles sobre esta materia, y que pudiesen disponer de sus bienes segun los principios generales de jurisprudencia. Me parece que la comision no debia haberse desentendido de que este artículo tenia ya el sello de la aprobacion de las Córtes en su primer extremo; y por lo mismo, cualquiera que fuese la opinion particular de sus individuos ó de algun otro Sr. Diputado, debian haberla sacrificado á lo ya aprobado por las Córtes. La comision, pues, solo podia modificar el artículo aprobado sin destruir en nada lo sustancial, y eso es cabalmente lo que ha hecho, suprimiendo la última parte. Así es que aunque cada Diputado puede opinar del modo que guste sobre el artículo aprobado por las Córtes, todo lo que se diga contra él es inútil, por ser ya una cosa decidida.

El Sr. **VARELA**: Las Córtes, al aprobar el artículo anteriormente presentado, no hicieron más que poner la base sobre la que debian fundarse sus determinacio-

nes posteriores. Bajo este concepto hizo su adición el Sr. Suarez, y así por haberla admitido las Córtes, como por la razón que acabo de expresar, el Congreso está en el día en toda libertad para deliberar lo que mejor le pareciere sobre esta materia. Así, las reflexiones que ha hecho el Sr. Romero para probar que ya las Córtes parece que están ligadas en virtud de lo aprobado, no tiene fundamento alguno. Insistiendo en los mismos principios del señor preopinante, á saber, que al militar se le dan por dicho artículo los mismos derechos ó todo lo favorable como á los demás ciudadanos, diré que cabalmente esto no se consigue si no se aprueba lo que propone el Sr. Suarez, pues es favorable que tenga el militar todas las garantías que tienen los demás ciudadanos para que se obedezca su última voluntad. Aquí se trata, no solo de un militar, sino de su familia, que puede quedar reducida á la mayor miseria por la perversidad de uno ó dos testigos. Creo, pues, que el Congreso debe aprobar la adición, pues de lo contrario concederá un privilegio odioso, que ninguna clase de la sociedad debe tener. Todo cuanto se concede á los militares no es por un privilegio, sino por necesidad, y por esta se les dispensa de testar en ciertos casos apurados con las formalidades á que están sujetos los demás ciudadanos; pero no deben quedar dispensados de estas formalidades cuando puedan sujetarse á ellas, como sucederá, por ejemplo, cuando un militar esté en Madrid ó en otra parte en que pueda testar como los demás ciudadanos. Este, repito, sería un privilegio odioso que se le quiere conceder, y que lejos de favorecerle, le perjudica, é igualmente á la sociedad, que está interesada como el militar en que su última voluntad no quede contrariada, y en que sus bienes no puedan usurparse.

El Sr. ROMERO: Por lo que ha dicho el señor preopinante, no puedo prescindir de que se lea el artículo impreso y el que ahora se discute.»

Habiéndose verificado la lectura de ambos artículos, dijo

El Sr. VARELA: Las Córtes, admitiendo la adición del Sr. Santos Suarez, han dado á entender que el artículo aprobado necesitaba de alguna modificación.

El Sr. INFANTE: La comisión dará su dictámen sobre la adición del Sr. Suarez; pero esto no debe impedir la aprobación del artículo.»

Dado el punto por suficientemente discutido, propuso el Sr. Valdés (D. Cayetano) que se añadiese la expresión «en campaña;» más habiendo contestado el Sr. Infante que de esto se hablaba en los artículos siguientes, se puso á votación el artículo, y fué desaprobado, acordándose que volviese á la comisión.

Leído el art. 2.º, dijo

El Sr. GAROZ: El Sr. Romero, en defensa del anterior, ha convenido en que sus ideas están en lo esencial de acuerdo con las de los que le impugnamos; pero que estando aprobado antes, ya no puede contrariarse. Yo digo que por lo mismo es por lo que no se está en el caso de aprobarle, ni aun de discutirle. Considerado como aprobado, sin adición ni variación, no puede ser objeto de discusión, porque lo prohíbe el Reglamento; y si como adicionado, no haciéndose la comisión cargo de las adiciones, tampoco tiene lugar. No se diga, como el Sr. Infante, que después se informará sobre las adiciones cuando resulte aprobado como hoy se propone, porque esto es prueba de que tal como hoy se presentan todos los artículos de testamentos no han recibido la aprobación del Congreso, y así este artículo está en el mismo caso que el desaprobado.

Parece que le recomienda más á este que al primero, el que habla del caso de acción y conflicto de guerra y que entonces la necesidad lo exige, como ley superior á todas las positivas. Convengo en que los soldados en lances tan apurados no tienen á mano escribano y testigos de las calidades apetecidas por las leyes en los testamentos comunes; pero ¿podrán tener soldados, sargentos, oficiales y jefes ante quienes otorguen sus testamentos? A buen seguro que más testigos tienen en su derredor, aun cuando están tendidos en campo de batalla que los demás enfermos; y autorizando á las personas que cité en mi adición á este artículo, y aun á los facultativos en concepto de escribanos, con la calidad de fijar la duración de actos otorgados en tan apuradas circunstancias con los requisitos ordinarios, quedaba ocurrido al inconveniente de que en sus últimos suspiros tuviesen los militares el consuelo de testar, asegurando el que se pasasen á las mayorías sus disposiciones la certeza de que serían cumplidas.

Esto mismo es lo que se hace en todas las Naciones cultas de Europa, pero con la restricción de que solo valen estos testamentos privilegiados mientras los ejércitos están fuera del Reino, y seis ó menos meses después; y así, tanto por estas consideraciones como por las alegadas contra el anterior, opino que se repruebe el artículo ínterin no se le arregle á las ideas de las adiciones hechas á él.

El Sr. ROMERO: El señor preopinante no ha hecho rigurosamente una impugnación al fondo del artículo, porque la hubiera hecho en el caso de que se hubiese limitado á demostrar que cuando hay un inminente riesgo militar de cualquiera clase, el militar no debe tener ciertas excepciones y privilegios para hacer su testamento, que es lo único que dice el artículo. Ha dicho S. S. que este testamento solo debería ser válido cierto tiempo que se determinase; es decir, que fundado en el principio de que solo la necesidad hace que el testamento del militar sea válido cuando no tiene los requisitos que las leyes comunes exigen para los demás testamentos, en el caso de un conflicto en acción de guerra ó en otro riesgo militar, ha querido sostener que de aquí se debe deducir que el testamento solo puede ser válido en cuanto lo exige esta necesidad, y por consiguiente que habiendo salido de aquel riesgo el militar, y trascurrido cierto tiempo, la fuerza del testamento privilegiado debe cesar, y quedar el militar sujeto á los mismos requisitos que los demás ciudadanos. Es necesario tenga presente S. S. que esa no es una verdadera impugnación al artículo. En el artículo no se dice si la validación del testamento ha de ser por tanto tiempo, sino que será válido en esos casos; que podrá testar el militar en esos lances de cualquiera manera, con tal que conste su voluntad. Por lo demás, si S. S. cree que la validación del testamento debe reducirse á un tiempo determinado, eso deberá ser objeto de una adición; de manera que aunque ahora se apruebe el artículo, puede tener lugar la idea del señor preopinante. De consiguiente, supuesto que hasta ahora no se ha presentado razón alguna que destruya el objeto del artículo ó que manifieste que no son convenientes los fundamentos en que se apoya esa excepción de los militares por una razón justísima, no solo de conveniencia pública, sino de necesidad, porque en tales casos es necesario dejar toda la latitud posible al que se encuentra en circunstancias tan apuradas para que manifieste su voluntad de cualquier modo; creo que las Córtes pueden aprobar el artículo, sin perjuicio de que lo que

acaba de indicar el señor preopinante, ó lo que indique cualquier otro Sr. Diputado acerca de si la validacion del testamento debe reducirse á cuatro, seis ú ocho meses, produzca una adición que me parece tomará la comision en consideracion.

El Sr. **MARAU**: La impugnacion que el Sr. Garoz ha hecho al artículo que se discute, no ha sido ni puede ser combatida por el Sr. Romero ni otro alguno, por más diestro que sea en la argucia. El valor que las leyes antiguas y las modernas han concedido á los testamentos que hagan los militares en momentos de riesgo, es solo en consideracion á que el hombre desgraciado que va á sacrificar su existencia por cumplir con su obligacion, pueda hacer constar y trasladar su voluntad despues de su existencia para que se haga de sus bienes lo que él quiera. Los requisitos y formalidades externas que todas las leyes exigen para los testamentos, no han tenido otro objeto que hacer constar, como dije en otra sesion, la voluntad de un hombre que no existe ya. Vamos á ver si este llamado privilegio de testar que se concede á los militares es una gracia en favor de esta clase benemérita, que tan digna es de toda consideracion, ó más bien si es un perjuicio que resulta contra ellos. Si las formalidades externas de los testamentos se han inventado por los antiguos legisladores para que conste la voluntad del hombre que no existe ya, á fin de que sus bienes reciban aquella direccion que él quiso darles en el último momento de su vida, las formalidades externas son una prevencion favorable al mismo que deja de existir: aqui se suprimen todas; luego este privilegio es contra aquel á favor de quien se establece, porque todo lo que sea quitar las dificultades para que no se pueda desconocer ó alterar su voluntad, es hacer su condicion peor que la de los demás ciudadanos. Si pues solo en consideracion al inminente riesgo, solo en gracia de la imposibilidad en que se ve el militar algunas veces de manifestar su voluntad con todas las formalidades que requiere la ley, le dispensa ésta de ellas, ¿qué razon habrá para que cesando la causa no cesen los efectos, es decir, para que fuera ya del riesgo y en plena libertad de hacer testamento con todos los requisitos que la ley quiere para que conste su voluntad, no haya de formalizar precisamente su testamento en estos términos para que sea válido? Dice el Sr. Romero que esto podrá ser objeto de una adición. Yo diré que no: que esta es parte esencial y principal del mismo artículo, y que si se aprueba éste y despues no se aprueba la adición, queda el artículo con todos los vicios que pueden hacer una ley perjudicial é injusta. Añádese al artículo la calidad *sine qua non* de que pasados tres ó seis meses del riesgo deba el militar hacer nuevamente testamento con todas las formalidades que la ley requiere, pero no se diga absolutamente que cualquier hombre que se encuentre en inminente riesgo, ora sea en una navegacion, ora en una batalla, ora en un incendio (que yo tambien admitiré esto) pueda hacer testamento sin formalidad ninguna, como propone la comision, y que luego se haga una adición para que este privilegio odioso admita ó no modificaciones. El artículo por sí, tal como está, ¿es ó no suficiente para llenar el objeto de la ley? En mi concepto no lo es, ni creo que en el de los señores de la comision, pues de lo contrario no reconocerian la utilidad ó más bien la necesidad de la adición que ha indicado el Sr. Garoz. Así que, yo creo que sin que se ponga desde ahora en el artículo que este privilegio de testar sin las formalidades externas no puede durar más que dos, tres,

cuatro ó seis meses despues de haber salido del riesgo, y que pasado este término dicho testamento quede sin valor ninguno, no puedo aprobarle, y con esta circunstancia lo aprobaré.

El Sr. **ROMERO**: Que se lea el artículo aprobado anteriormente: (*Se leyó*). Que se lea el acuerdo de las Córtes: (*Se leyó*). Que se lea tambien el art. 109 del Reglamento.

El Sr. **MARAU**: Yo preguntaré: si se trata de una cosa aprobada, ¿por qué se pone de nuevo á la deliberacion de las Córtes? Si está ya aprobado, no haya discusion, no haya votacion; pero cuando se pone á la deliberacion de las Córtes y se admite á discusion, quiere decir que estos artículos pueden admitir reforma; y si pueden admitirla, las Córtes la harán ó no, segun tengan por conveniente.»

Leido el art. 109 del Reglamento, dijo

El Sr. **INFANTE**: La comision vuelve á repetir que animada de la mayor buena fé, que debe caracterizar á toda comision del Congreso, á pesar de que fueron aprobados los primeros artículos del proyecto que presenta á la deliberacion de las Córtes, como ha hecho alguna alteracion, aunque, segun ha dicho dos ó tres veces, ninguna esencial, por esto los ha presentado nuevamente á la consideracion de las Córtes; pues ha querido que cuando llegue el caso de leerse en las Córtes la ordenanza para que recibiendo su sancion se publique, no se viese que ni una palabra siquiera habia alterado la comision. El artículo que ahora se propone, como ha dicho el Sr. Romero, se ve que es casi idéntico al que aprobaron las Córtes antes; no hay variacion esencial ninguna: ha añadido ó variado alguna que otra palabra la comision para dar mayor claridad á los artículos; no ha hecho otra cosa.

Contestaré ahora á las objeciones que se han hecho á pesar de que el Sr. Romero lo ha hecho ya á la del señor Garoz, reproducida por el Sr. Marau. La comision estará pronta á admitir cualquiera adición que los señores Diputados hagan á este artículo ú otro; pero si lo que la comision propone no lo contrarian los Sres. Diputados, que solo creen que falta una cosa que puede ser objeto de una adición, y que si sirve para mayor claridad, la admitirá la comision gustosísima, digo que no hay inconveniente en que se apruebe, pues el artículo únicamente dice que en el conflicto de una campaña, de una accion ó cuando se prepare para ella el militar, pueda testar cómo y en la forma que el artículo prescribe. El argumento que se hace es que no sea válida por más tiempo que por cuatro ó seis meses esta voluntad del testador despues de haber salido del conflicto, pero buen cuidado tendrá aquel de renovar su testamento ó hacer lo que le parezca segun su voluntad, porque la necesidad desapareció. Si ha pensado despues de otra manera, ya cuidará de renovarle y de darle mas formalidad, á no ser que piense de otro modo por haber desaparecido ya el motivo que tuvo para testar de aquella manera; pero á un militar que salió de una accion en que testó, y vivió despues quince ó veinte años, no puede servirle ya el testamento que hizo en la accion, pues solo sirvió para el acto. Mas la comision repite que si hay necesidad de mayor claridad en el artículo, admitirá gustosa cualquiera adición que se haga; pero no me parece sin embargo que hay inconveniente en que se apruebe el artículo como se presenta.

El Sr. **SUABEZ**: Dos son los modos con que, segun este artículo, puede testarse en cualquier conflicto por un militar, bien de palabra ante dos testigos, bien

escribiendo ó firmando su última voluntad. Creo que uno y otro de estos casos están expuestos á gravísimos inconvenientes, y que aún no se salvan con la adición del Sr. Garoz: porque ó estos testamentos son para las personas que sobreviven á ese peligro, ó para las personas que han perecido en él; y el riesgo está respecto de los que han perecido en la batalla ó conflicto. A estos es muy fácil que se les suponga que ó bien han escrito un testamento, respecto á la mucha facilidad que hay para imitar las letras y suponer una escritura que no sea de aquella persona de quien se supone, ó bien que dos personas afirmen haber expresado su voluntad un militar que ya no existe y no puede desmentir lo que se supone. ¿Y qué resulta de aquí? Que un militar, por ejemplo, que ha sido bastante cauto para otorgar su testamento antes de ir á campaña, á fin de asegurar á su familia lo poco que le deja y que no le quede absolutamente motivo alguno de enredo, se vería expuesto á que sin embargo de toda esta precaucion suya se le fingiese un testamento en el último conflicto, y de consiguiente que se eludiese su precaucion y perjudicase á sus hijos, como puede perjudicárseles quitándoles la parte de libre disposicion. Este creo yo que es un mal tan grave, que no puede evitarse ni aun con la adición del Sr. Garoz: ya sea por escritura ó por deposicion de dos testigos que se presenten, quedaria una puerta abierta para defraudar aun á aquellos militares que hubiesen sido mas cautos para asegurar á sus familias la sucesion de lo poco que les dejasen. Así, yo creo que este inconveniente siempre sería mucho mayor que el que se seguiria de que un militar pudiese morir sin testamento; porque se sabe que por las leyes generales se han establecido las reglas de sucesion; que las leyes comprenden á todos los españoles, y que sería un pequeño mal el de que un militar poco cauto por no haber hecho su testamento con anticipacion muriera sin él, respecto del mal gravísimo que llevo expresado. Pero se dirá, Señor, que el artículo está ya aprobado. Enhorabuena que sea así; pero al menos que se salve ó prevenga de algun modo el perjuicio que podría resultar á un militar poco cauto por no haber hecho su testamento antes del conflicto, y se disponga que respecto á los militares que para precaver este caso hubiesen otorgado su testamentos con todas las formalidades de la ley antes de salir á campaña, no pueden ser válidos los posteriores otorgados sin esta circunstancia; y entonces vendria muy bien la adición del Sr. Garoz.

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Había pedido la palabra con un objeto, pero he visto dar á la discusion un giro que me hace preciso hablar en otro sentido: porque no se trata de un privilegio para los militares y mucho más un privilegio de que pueden resultarles tan graves perjuicios; se trata de poner en algun modo á cubierto los bienes de los que mueren en la guerra, y de proporcionar que estos puedan disponer de ellos. Se trata de los militares que no hayan pensado en hacer testamento porque no hayan tenido nada de qué hacerle; pero que en medio de una accion adquieren algo, y tienen que dejarlo á quien gusten. El artículo dice que los militares pueden hacer, pero el artículo no tiene que decir lo que pueden hacer; cada uno puede hacer lo que se le antoje: de lo que se trata es de si lo que uno hace será válido despues. Esta validacion no es privilegio, ni es más que reconocer una necesidad; pero es menester evitar que sea un subterfugio para quitar á la familia lo que el individuo ha ganado. En una campaña, en cualquiera accion, la parte del cuerpo

que queda toma conocimientos de los efectos, papeles y demás de los individuos del mismo que han perecido, é igualmente por los caminos que debe haber marcados para ello, se toma conocimiento de la última voluntad, para que no venga uno despues de algunos años diciendo: «á mí me dijo Fulano de Tal cuando murió que se diera esto á este ó al otro.» Se reconocen todos sus efectos, mochilas, vestidos, papeles; se hace inventario de ello, y los cuerpos dan parte de todo, y la darán por necesidad de estos testamentos si los hay; y así no queda abierta la puerta á todas las supercherías que han dicho los señores preopinantes. El testar es para el que se muere, porque el que está vivo no tiene necesidad de hacerlo. El militar tiene esa facultad como todo el mundo, pero esa facultad es buena para los asuntos ordinarios; en los militares es válida si concurren tales ó tales circunstancias. El objeto de esto es que el que se muere y el que haya salido bien puedan disponer de lo que tengan pero que no pueda disponer de ello otro aventurero; y para conseguirlo es menester que el artículo vuelva á la comision para que lo redacte de otro modo, diciendo que el militar en campaña en todos los casos de peligro pueda hacer testamento de este ó del otro modo; pero que del mismo debe hacerse constar en el momento que haya pasado el suceso, y entonces será válido, porque si no nos exponemos á que se presente un cualquiera, dos, tres ó cinco años despues y diga: «Señor, esto no debe ser así, porque Fulano mandó esto y esto;» de donde podría resultar que la familia quedase en un abandono. No se trata, pues, de un privilegio, sino de ocurrir á la necesidad. Así, es menester, repito, que vuelva el artículo á la comision para que lo redacte en otros términos y conceda esas facultades, pero con las restricciones necesarias para evitar los perjuicios. Por lo mismo había pedido la palabra en pró de la idea, pero no del artículo como está redactado, porque no lo puedo aprobar.»

Dióse el punto por suficientemente discutido, y puesto el artículo á votacion por partes, fué desaprobada la primera, y en su consecuencia se mandó volver todo el artículo á la comision, y ésta retiró el 3.º

Leído el art. 4.º, dijo

El Sr. ROMERO: Parece inútil ocuparse en la discusion de este artículo, porque dicen lo que el Código militar de procedimientos determinará los requisitos que deban observarse para acreditar la identidad de la firma del testador y para abrir su testamento cerrado, se refiere al testamento militar cuya índole está prefijada en los dos artículos precedentes; mas pues que las Cortes han desechado toda idea de testamento privilegiado militar; puesto que no han querido ni aun que los militares gocen el derecho de esos testamentos privilegiados, aun en el caso de un combate ó riesgo inminente, quiere decir que ya el Código militar de procedimientos nada tiene que determinar acerca de estos, porque sujetos ya los militares en sus testamentos á las fórmulas de los demás ciudadanos, lo que determine el Código general de procedimientos será lo que deba observarse en los dos casos á que se refiere el artículo, á saber, la identidad de la firma del testador y apertura del testamento cerrado. Por consiguiente, partiendo del principio de que no hay testamento militar; que las Cortes han aprobado que los militares queden en un todo sujetos á lo que previenen las leyes civiles; que no pueden ser válidos sus testamentos si no tienen las formalidades que las leyes exigen, es inútil entrar en la discusion de este artículo, así como lo será todo lo que le

es relativo, puesto que parte de la existencia de un testamento militar privilegiado, y puesto que las Córtes se han servido reprobárselo, acaso no sin utilidad pública, hasta en los casos de inminente riesgo.

El Sr. **ARGÜELLES**: Al oír al señor preopinante, confieso francamente que me he alarmado; pues aunque las Córtes han reprobado el artículo, la legislación española admite los testamentos militares. En este sentido creo que la intención del Congreso no ha sido reprobárselo, ha sido no aprobar los términos en que se presentaba el artículo; y así es que en seguida de la reprobación han dicho «vuelva á la comisión;» y si hubieran desaprobado que hubiese testamentos militares, claro es que sería una contradicción manifiesta el mandar que el artículo volviese á la comisión. Hay más: ¿cómo el señor preopinante, cuyos conocimientos en esta materia son tan notorios, y cuando no lo fuesen, su discreción y su perspicacia los suplirían, puede dejar de conocer que si fuera así, una considerable parte de ciudadanos españoles no podría testar? ¿Cuántos españoles habrá que, alistados en las banderas nacionales, irán á la guerra sin haber tenido antes motivo ni ocasión de haber dispuesto de su propiedad? Muchos, porque son muchas las causas que influyen para no hacerlo; ya el deseo general de retardar esa última voluntad, porque trae solamente la idea triste y desagradable de anunciar el término de la vida, que es bien poco placentera, y puede asegurarse que los más de los individuos dejan esta voluntad para el último trance de la vida. Es visto que una gran parte se verían privados de hacer constar su voluntad, porque reservándolo para el caso de una guerra ú otro peligro, si fuese cierto lo que el Sr. Romero expone, habrían de quedar, como ya he dicho, privados de testar. Luego las Córtes no han querido en la reprobación de ese artículo decidir que no hubiera en adelante testamentos militares; y aun cuando hubiese sido esa su intención, es positivo que la experiencia de muy poco tiempo excitaría en las Córtes sucesivas el deseo de reparar esta falta. Así que, creo que el artículo que se discute, relativo al Código de procedimientos militares, está en su lugar; porque será imposible que cuando se discuta ese Código, se deje de reconocer la necesidad de establecer alguna regla que sirva de guía á los militares en los casos de que se habla en este artículo. Por consiguiente, yo lo apruebo, porque supone un caso que no puedo creer que las Córtes lo hayan desechado.

El Sr. **ROMERO**: El Sr. Argüelles ha supuesto que las Córtes solo han desechado los términos en que estaba concebido el artículo. Sobre los términos no puede haber recaído la reprobación, porque en los mismos términos estaba aprobado pocos días antes, y por consiguiente la reprobación ha sido de que existan los testamentos militares privilegiados.»

El Sr. **Garoz** propuso que volviese también este artículo á la comisión; pero dijo

El Sr. **VALDES** (D. Cayetano): He pedido la palabra en pró del artículo, por dos razones: primera, porque estoy encargado del Código, y parece que quitar este artículo, es como decir que en el Código de procedimientos no se trate de eso. Este es un artículo relativo; y sean cuales fueren los anteriores, el Código de procedimientos se arreglará á los artículos que encuentre establecidos. Pero el Sr. Romero ha dicho que las Córtes han reprobado el artículo que habla de la validación de los testamentos militares. Le han reprobado, es verdad, porque es absolutamente imposible que los militares

queden sin esta facultad, y también que se exija que haya escribanos en donde se hallen. En la armada los contadores tienen la misma autoridad que los escribanos, y sus testimonios tienen la misma fé en los juicios: en el ejército mismo, si se hace fiscal y escribano á militares para pasar á uno por las armas, más fácil sería hacerlo para otorgar un testamento. Pero, Señor, uno que está fuera de su Patria y en un círculo muy pequeño, ¿puede estar sujeto á los requisitos de los demás? Es imposible. Por consiguiente, las Córtes no pudieron desaprobárselo que hubiese testamentos militares, porque es imposible que deje de haberlos: desaprobaron estos artículos porque no contenían todas las cláusulas necesarias, para que los testamentos no fuesen falsificados. ¿Y qué se dice en este artículo ahora? Que el Código de procedimientos arreglará las formalidades para los dos casos que comprenden, á saber: reconocer la identidad de la firma, y abrir el testamento cerrado; y ciertamente que si todo el mundo tiene derecho á hacer testamento cerrado, no sé por qué se ha de suponer privados de él á los militares. Este es un precepto que se impone para que en el Código obre sus efectos. En este sentido no sé por qué se ha de desaprobárselo; al contrario, lo creo bueno y útil.»

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el artículo fué aprobado, así como también el 5.º sin discusión alguna.

Leído el 6.º, dijo

El Sr. **VALDES** (D. Cayetano): Quisiera que la comisión me explicase este artículo, porque ciertamente no lo entiendo.

El Sr. **INFANTE**: Se trata de que si un militar muere en campaña, pueden hallarse entre sus efectos algunos planos, memorias ó documentos que puedan perjudicar á la Nación y ser útiles al enemigo, ó más bien que no convenga que estén en manos que puedan hacer mal uso de ellos; y se dice que en tal caso no se entreguen á sus herederos. Puede un militar inteligente levantar un plano del terreno donde se está haciendo la guerra y morir en ella: si este plano ó una Memoria escrita sobre el modo de hacer la guerra, etc., pasasen á sus herederos, podía perjudicar á la Nación y favorecer al enemigo, si cayese en sus manos. Así, aunque es una herencia, se dice que no se entregarán, por evitar este peligro, aun cuando podrán muy bien entregarse cuando hayan pasado las circunstancias en que puedan ser perjudiciales.

El Sr. **VALDES** (D. Cayetano): Entiendo bien que cuando entre los efectos de un militar se encuentren planos que puedan ser útiles, el Gobierno debe sacar una copia y aprovecharse de ellos; pero que no se entreguen á los herederos, que no son enemigos de la Nación, no sé en qué pueda fundarse. Aquellos documentos que puedan ser útiles á la Nación, sin necesidad de poner un artículo de ordenanza creo que no habrá ningún español que pidiéndoselos el Gobierno no los entregue; pero de pedirlos á quitarlos hay mucha diferencia. Si ocurriese el caso de que los herederos del militar fuesen enemigos, entonces podría suspenderse el entregarlos; pero aun así sería preciso decir que no se entregarían hasta que hubiesen pasado las circunstancias en que peligraba la Nación.

El Sr. **ROMERO**: Me parece que en este artículo se dispensa todo el respeto debido á la propiedad; porque como deben recogerse todos los papeles de oficio, para no dar lugar á dudas y tergiversaciones, y á que tal vez un jefe precipitado sustrajese de entre los efectos

de un militar difunto cosas que no debía, declara de una manera positiva que no se entenderán por papeles de oficio aquellos que, aunque concernientes al servicio militar, no hayan sido hechos desempeñando una comision ó empleo del servicio. Pero al mismo tiempo la comision habrá tenido presente que si bien por una parte debe respetarse la propiedad, por otra es necesario atender al interés de la Nacion, teniendo á la vista los resultados que pueda ofrecer la publicacion de estos papeles. Un militar encargado de un puesto puede haber formado el plano de una fortificacion, cuya revelacion pudiera causar perjuicios muy considerables, y he aquí por qué la comision, para que estos papeles no vayan pasando de mano en mano, y acaso lleguen á la del enemigo, ha dicho que á pesar de que sean una propiedad del difunto, y una produccion suya hecha privadamente y sin ninguna relacion con el servicio, no se entreguen á los herederos. Yo apelaré á los señores de la comision de Guerra y á los señores ingenieros para que digan si no hay trabajos de esta especie cuya publicacion podria comprometer á la Nacion hasta cierto punto. Supongamos que un ingeniero célebre se ha ocupado por efecto de su laboriosidad en trabajar planos de una plaza importante; pregunto yo: ¿seria conveniente que á su muerte anduviesen estos de mano en mano hasta llegar acaso á las de un ingeniero enemigo que se sirviese de ellos en perjuicio de la Nacion? Dice el Sr. Valdés que los herederos del militar no son enemigos. Es verdad; pero pueden hacer un mal uso de ellos inocentemente y causar los perjuicios de que ya se ha hablado, y que la comision procura evitar por este artículo.

El Sr. **VALDES** (D. Cayetano): El Sr. Romero ha apelado en apoyo de su opinion á los señores de la comision de Guerra para que digan si no podrán resultar grandes perjuicios de que se divulguen los planos formados por un ingeniero célebre pasando á manos de sus herederos; y pregunto yo: si el heredero es otro ingeniero asombroso, ¿se le quitará el único caudal que le deja su padre? Porque, no nos engañemos; el militar que hereda papeles importantes sobre este ramo puede con ellos hacer su suerte; y aquí se trata de quitársela, á pretexto de que indirectamente podrá perjudicarse á la Nacion.

El Sr. **CASTEJON**: Estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Romero, y lo estaria tambien con el artículo añadiéndole solo una palabra; á saber, que respecto á aquellos papeles que no pudiendo interesar al Gobierno, sean propiedad del difunto, se entreguen á los herederos. De este modo se evitaria la publicacion que pudiera ser perjudicial, y no se atacaria la propiedad particular.

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: Toda la razon con que se quiere sostener esta parte del artículo, consiste en que sean papeles ó documentos que puedan perjudicar á la Nacion y ser útiles al enemigo si llegan á caer en sus manos; pero si este argumento vale para arrancarlos á los herederos legítimos, debe valer igualmente para arrancárselos al militar mismo. ¿No puede este dárselos á un amigo inteligente con quien quiera consultarlos, y llegar á perderse, y por último venir á parar á manos del enemigo? Claro es que sí; y si este peligro no se mira como una razon bastante para quitárselos á su autor tampoco lo es para no entregarlos á sus legítimos herederos. Una de dos; ó es menester impedir que ningun militar forme planos, escriba memorias sobre la guerra, etc., ó es menester permitir que tanto él como sus

herederos dispongan de estos trabajos. Si los herederos abusaren de ellos comunicándolos al enemigo, cometerán un delito y serán castigados con la pena que la ley le tiene ó tenga impuesta, la cual les contendrá para no hacerlo; y si ellos hacen un uso provechoso, á la Nacion no resulta un mal, sino antes un bien en entregárselos. Por tanto, encuentro que esta parte del artículo de ningun modo puede aprobarse.»

Dióse el punto por suficientemente discutido, y votado el artículo por partes, segun pidió el Sr. Gomez Becerra, fué aprobada la primera, pero no la segunda que empieza: «Los planos, etc.»

Aprobáronse sin discusion los artículos 7.º, 8.º, 9.º, 10, 11, 12, 13 y 14 con que termina este capítulo.

En seguida se procedió á la discusion de los artículos siguientes, que proponia la comision encargada del proyecto de instruccion para el Gobierno económico-político de las provincias, en lugar del 23 que no se aprobó, y de los otros hasta el 37 inclusive que se retiraron á consecuencia de esto:

«Art. 23. Cuando los Ayuntamientos hayan de tratar de los presupuestos referidos, lo harán á puerta abierta; en día festivo; á una hora cómoda, y anunciándolo al público con la anticipacion de tres dias para que los vecinos puedan concurrir, enterarse y representar á la Diputacion provincial lo que estimen conveniente, pero sin tomar la palabra ni parte alguna en la discusion y deliberacion del Ayuntamiento. El presidente lo hará observar así.

Art. 24. A los documentos y presupuestos de que trata el art. 22, acompañará el parecer del síndico ó síndicos dado en vista de ellos y extendido formalmente por escrito.

Art. 25. Si el Ayuntamiento necesita para gastos públicos y objetos de utilidad comun de alguna cantidad más que la que le estuviere asignada en el presupuesto anual, formará sobre ello el acuerdo conveniente, con la publicidad prevenida en el art. 23, y lo pasará al síndico ó síndicos para que propongan su dictámen por escrito.

Art. 26. Si la cantidad necesaria no excediere de tantas pesetas cuanto el número de vecinos del pueblo, y se conformaren los síndicos con el acuerdo del Ayuntamiento, se podrá hacer el gasto sin necesidad de otra facultad ó aprobacion, y justificándolo debidamente en las cuentas; pero se pondrá desde luego en noticia de la Diputacion provincial, quedan lo responsables los alcaldes, regidores y síndicos para el caso de que se dirija á dicha Diputacion alguna reclamacion justa y fundada.

Art. 27. Cuando el gasto exceda de la proporcion indicada, ó no sea conforme al parecer del síndico ó síndicos, se recurrirá á la Diputacion provincial, remitiéndole precisamente este parecer.

Art. 28. En el caso de que las obras públicas ó gastos de utilidad comun exijan más fondos que los que produzcan los propios arbitrios aprobados, se tratará, así de la necesidad ó utilidad del gasto, como del arbitrio ó arbitrios menos gravosos de que se pueda usar, con la publicidad que se prescribe en el art. 23; y el acuerdo que forme el Ayuntamiento se pasará al síndico ó síndicos para que expongan su dictámen por escrito.

Art. 29. No excediendo la cantidad necesaria de

la proporcion referida de tantas pesetas cuantos sean los vecinos, y conformándose los síndicos, se considerará como urgente la obra ú objeto á que se destinen los arbitrios, y se entenderá dado el consentimiento de la Diputación para poder usar desde luego de ellos con calidad de interinamente, mientras recae la resolución de las Córtes, bajo la responsabilidad de los capitulares y remitiendo el expediente á la Diputación provincial.

Art. 30. Pero si excediere la suma ó no hubiere la conformidad de los síndicos, se acudiré á la Diputación en los términos que quedan prevenidos en el artículo 27.

Art. 31. Estos arbitrios y los demás que se concedan para cualquier fin, se administrarán en todo como los caudales de propios; y así de unos como de otros publicarán los Ayuntamientos mensualmente estados de entrada, salida y existencia, con la expresion sucinta de la proveniencia ó inversion de los fondos públicos. La publicacion se hará con respecto á cada mes en los cuatro primeros dias del siguiente, fijando el estado en una tabla que se colocará á la puerta de la sala capitular, donde deberá permanecer hasta la publicacion de otro nuevo estado.

Art. 32. Dentro de los diez primeros dias del mes de Enero de cada año presentará el depositario de propios arbitrios las cuentas de estos fondos, correspondientes al año anterior, extendidas con formalidad y justificacion.

Art. 33. El Ayuntamiento, con asistencia del síndico ó síndicos, examinará estas cuentas, y si hallare algunos reparos que oponer á ellas, los extenderá por escrito, y comunicará el pliego que forme al depositario, si los reparos versaren sobre omision de cargo, falta de justificacion ú otro artículo de que él deba responder; ó á los capitulares del año anterior, si dichos reparos recaen sobre haber sido mal libradas algunas cantidades, sobre no haber tenido los fondos los debidos valores, ó sobre otros particulares de que puedan ser responsables los mismos capitulares.

Art. 34. Estos y el depositario en sus respectivos casos satisfarán á los enunciados reparos dentro de seis dias, ejecutándolo tambien por escrito, y con presencia de ello hará el Ayuntamiento las nuevas observaciones que se le ofrezcan.

Art. 35. Todas estas diligencias y las cuentas se pasarán á los síndicos, que examinándolas propondrán su dictámen, y en tal estado se remitirá todo á la Diputación provincial, ejecutándolo precisamente en el mes de Enero de cada año.

Art. 36. Al tiempo de remitir las cuentas y el expediente de reparos y observaciones, se remitirá tambien á la depositaria de la Diputación provincial el 10 por 100 impuesto sobre los productos de propios con destino á las obras públicas de la provincia y á los establecimientos de beneficencia.

Art. 37. Para que sea efectivo el apronto del 10 por 100, deben tener entendido los Ayuntamientos que se adeuda de todas y de cada una de las cantidades que se recauden únicamente por los productos de propios; de consiguiente, que cobrada una partida, solo pueden disponer de sus nueve décimas partes, quedando reservada la restante, y responsables con sus propios bienes los capitulares que libren más de aquellas.»

Los artículos 23, 24 y 25 fueron aprobados sin discusion.

Leido el 26, dijo

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Me parece que esa

facultad que se concede á los Ayuntamientos puede causar males de alguna trascendencia; porque aunque es verdad que solo está contraida á un número de pesetas proporcionado al de vecinos, sin embargo, es necesario que convengamos en la mala costumbre que se ha tenido en muchos de los Ayuntamientos para hacer repartimientos. Se me contestará que solo podrán verificarlo cuando traten de objetos de conocida utilidad y urgencia, y con la precisa é indispensable obligacion de hacer mérito en las cuentas; pero yo dejo á la consideracion de los señores de la comision con cuánta facilidad puede un Ayuntamiento hacerse cargo de estas cantidades, presentándolas gastadas de un modo útil, cuando acaso se hayan invertido en objetos, si no perjudiciales, por lo menos indiferentes. Por consecuencia, creo que nunca debe dejarse á los Ayuntamientos la facultad de imponer contribuciones á los vecinos, ni menos la de invertir los fondos de propios, aunque sea con la intervencion del síndico, sino que lo hagan presente á la Diputación provincial, y que solo recayendo la aprobacion de ésta sea cuando se lleve á su debido efecto.

El Sr. GOMEZ BECERRA: El Sr. Navarro Tejeiro ha impugnado este artículo bajo un supuesto equivocado, porque supone que aquí se trata de hacer repartimientos sobre los vecinos, y no es así. No se trata ni de repartimientos ni de nuevos arbitrios; se trata de que los Ayuntamientos puedan disponer para objetos de utilidad pública de los fondos que tengan en su poder; porque cuando se ofrezcan obras para las que no alcancen estos fondos, ya se habla en los artículos siguientes de lo que deberá hacerse: y como antes se ha prevenido ya que para tratar del presupuesto anual y de estos gastos, se deba contar siempre con el dictámen del síndico por escrito, y con una discusion pública en que todos los vecinos se enteren de lo que se trata y puedan hacer los recursos que estimen convenientes, parece que no debe haber ninguna dificultad en aprobar este artículo, cuyo objeto únicamente es sacar á los pueblos de esa tutoría en que han estado hasta ahora de acudir á las autoridades superiores para todo. Cuando se trate de los casos en que haya que adoptar nuevos arbitrios, podrán impugnar las medidas que propone la comision los señores que no las crean convenientes; pero aquí, repito, solo se dan facultades para disponer de los fondos que ya tienen.

El Sr. JAIMES: La comision propone que la cantidad de que puedan disponer los Ayuntamientos, sea relativa al vecindario, y esto me parece á mí una cosa chocante; porque sucederá que el Ayuntamiento de un pueblo dispondrá de 30 pesetas, y el Ayuntamiento de otro, que debe tener las mismas facultades que el primero, dispondrá de dos ó tres mil duros. Por eso yo quisiera que se dijese que pudieran disponer de una cantidad fija que la comision tenga á bien señalar, que es lo que se hacia antes: los Ayuntamientos podian disponer hasta de 200 rs., y en pasando de esa cantidad, tenian que acudir al intendente, que era la autoridad á quien competia la aprobacion. Esto creo yo que deberia hacerse tambien ahora, ó cuando no, hacer una escala de pueblos, diciendo, porejemplo, que los pueblos de 2.000 vecinos dispongan de 1.000 rs., los que bajen de este número de 500 rs., etc.

El Sr. LODARES: La objecion presentada por el señor preopinante gira sobre que cree S. S. que debe fijarse una cantidad, ó cuando no, hacer una escala de pueblos. La comision ha creído que la mejor escala

era la proporcion con el vecindario; y que poniendo una peseta por cada vecino, era una cantidad moderada, y que al mismo tiempo podia bastar á las obligaciones perentorias de los Ayuntamientos.

El Sr. **AYLLON**: Quisiera yo saber si los señores de la comision tendrian inconveniente en que se dijese que podrian disponer de esa cantidad para todos los gastos; porque si no, pueden suponerse cada dia nuevas necesidades, y gastarse muchísimo más de lo que importa una peseta por cada vecino.

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: Siempre que los pueblos estén en el caso de tener estos fondos, creo que no hay inconveniente en que lo gasten en una ó en muchas veces.»

Declarado el punto suficientemente discutido, quedó aprobado el artículo.

Tambien lo fueron, pero sin discusion, los siguientes 27 y 28.

Leido el 29, el Sr. *Escudero* se opuso á él, por no ser en su opinion regla justa para graduar la urgencia de los gastos de los fondos públicos el montamiento de unos y otros, sino la necesidad verdadera, y no solo presunta, del objeto de utilidad comun del pueblo y el perjuicio en la dilacion; y que solamente cuando á la evidente utilidad se agregase considerable daño al vecindario en retardarse la ejecucion de alguna obra pública, se deberia permitir á los Ayuntamientos que sin previa licencia de las Diputaciones provinciales pudiesen mandar principiar las obras.

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: La comision se ha propuesto todo lo contrario; y como ha dicho antes, no solo sacar á los pueblos de esa tutoría en que han estado, sino tambien economizar el tiempo que tanto necesitan las Diputaciones provinciales y las Córtes, librándolas del exámen de una multitud de expedientes que verdaderamente importan poco, y en los cuales al cabo es menester estar respectivamente al juicio de las Diputaciones y Ayuntamientos. Por un artículo de la Constitucion pueden disponer inmediatamente las obras que sean urgentes, dando parte despues á la Diputacion provincial; y con el objeto que he dicho, propone la comision que las obras de poca entidad se consideren como urgentes, para uniformar este artículo con el constitucional, y no abrumar á las Diputaciones provinciales con el exámen de un sin número de expedientes de poca importancia.»

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el artículo fué aprobado.

Lo fueron tambien sin discusion el 30, 31, 32, 33 y 34.

Leido el 35, dijo

El Sr. **BUEY**: Las Córtes tuvieron á bien desaprobar las juntas de los ex-capitulares cuando se discutió el art. 35; pero ahora veo que la comision retrocede demasiado de aquel pensamiento, que en mi opinion particular no dejaria de producir bienes. Si se limita este exámen de cuentas á solo los capitulares, como se propone, y despues se llevan á la Diputacion provincial, es separar el acto de la publicidad que debe tener. Bueno está que se haga lo primero; pero yo quisiera que antes de llevar las cuentas á la Diputacion, se dejaran por algunos dias expuestas al exámen del público en la casa de uno de los concejales para que se instruyese de ellas el que quisiera; porque puesto el artículo como la comision lo propone, se deja absolutamente este exámen en manos de los capitulares y en estos suele haber sus cosas.

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: Si se adoptase la idea del Sr. Buey, habria una dilacion más en la presentacion de cuentas; y además la comision no ha estimado necesario dar esta publicidad, lo primero, porque deja establecido y han aprobado las Córtes que se hayan de poner al público mensualmente los estados de entrada, salida y existencias de caudales; y lo segundo, porque en el art. 92 se propone otra medida que producirá su efecto para este caso, si las Córtes tienen á bien aprobarlo. Dice el art. 92: (*Lo leyó*). He aquí la publicacion que quiere el Sr. Buey, y aun más extensa de la que ha propuesto, y sin tener los inconvenientes de que el expediente ande en manos de cualquiera que diga que desea verlo.»

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el artículo fué aprobado.

Leido el 36, dijo

El Sr. **ALVAREZ** (D. Elías): No impugnara este artículo, si no viera que en los siguientes se iba á abolir una práctica perjudicial, que constantemente se ha seguido. (*Leyó el artículo*.) Este décimo de propios tenia los mismos defectos que el eclesiástico, y en justicia toda contribucion debe exigirse de la parte que queda de productos, rebajados los gastos que se hayan hecho en su administracion. En esta hay gastos de recaudacion, hay cargas reales á que están afectas las fincas de los propios de ciertos pueblos, y saldrán más recargados estos que aquellos cuyas fincas no están gravadas con semejantes cargas. Esto supuesto, y que debe haber una igualdad proporcional en todos, sería conveniente que se expresase en este artículo la idea de que este décimo se entendiese hecha la deducion de los gastos que para su recaudacion se hubiesen ocasionado, ó por lo menos de las cargas reales que tienen sobre sí. Si la comision no tiene reparo, formalizaré la proposicion.

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: En este artículo no se trata de imponer la contribucion del 10 por 100 sobre los productos de propios; la comision la ha hallado impuesta, y esta no es la ocasion de tratar de si deben derogar ó no los decretos por los que está establecida. Únicamente la comision se limita aquí á decir cómo deben cumplirse estos decretos. Sin embargo diré para satisfaccion del señor preopinante que la comision, animada de los mismos deseos que S. S., y procurando en todo ponerse de parte de los pueblos, ha dado en el artículo siguiente una prueba de ello. En todos los decretos que han establecido este impuesto, solo se habla de propios, mas las oficinas encargadas de la recaudacion lo han extendido tambien á los arbitrios. La comision, para evitar este abuso, hace la aclaracion debida en estos términos: (*Leyó el artículo siguiente*). En vista de esto, los argumentos é inconvenientes propuestos por el señor preopinante se reducen infinitamente, porque no recargándose más que á los productos de propios tan disminuidos por la enajenacion de sus fincas, quedará esta cantidad sumamente reducida, de modo que faltará el gravámen que posaba hasta aquí sobre los pueblos.»

El Sr. *Alvarez* indicó que aun así padecerian mucho, porque habia pueblos cuya riqueza consistia únicamente en los propios, como sucedia en todos los de la sierra de Cuenca, Segovia, etc.

En seguida fué aprobado el artículo.

Leido el 37, dijo el Sr. *Escudero* que del modo que se presentaba el artículo, complicaria demasiado las cuentas, y además ponía trabas extraordinarias para poder usar de estos fondos, aplicándolos á los objetos á

que estaban destinados, lo cual podria traer perjuicios á los pueblos.

A lo que contestó diciendo

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: Este artículo tiene por objeto evitar los manejos de los que administran los caudales públicos, y hacer que sea efectiva esta contribucion en beneficio de un objeto tan recomendable como lo son las obras públicas y establecimientos de beneficencia. Aquí se trata de evitar un abuso establecido hasta ahora; ha estado mandado que se lleven los impuestos sobre propios al mismo tiempo que las cuentas, y raro era el pueblo que lo cumpliera, disculpándose con los pretestos de haber invertido esta cantidad en otros objetos, y entre tanto quedaban las cuentas sin liquidar. No dice la comision que no puedan usar de estos fondos para sus necesidades urgentes, sino que quiere que sea bajo la responsabilidad de los capitulares, que tendrán buen cuidado de reemplazar esta cantidad con otra que entre, si alguna vez tienen necesidad de usar de ella. Esto es lo que se quiere asegurar por medio de la responsabilidad de los capitulares.»

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el artículo fué aprobado.

Pasóse en seguida á continuar la discusion del capítulo 2.º que trata de las Diputaciones provinciales, que ayer quedó pendiente, y se leyó el art. 72, que decia:

«Art. 72. Por lo mismo se hará constar en el expediente la posibilidad ó imposibilidad del pueblo para sostener su existencia civil, los inconvenientes ó ventajas que resultarán de su agregacion, la distancia del pueblo á que se haya de agregar, y la facilidad ó dificultad de la comunicacion entre ellos. Tambien se acreditará cuáles sean los derechos, aprovechamientos ú otros goces, sin comunicarlos á los del otro pueblo á que se agregue.»

Leido este artículo, dijo

El Sr. **MELLENDEZ**: Hallo una especie de contradiccion entre la primera y segunda parte de este artículo. En la primera veo que á los pueblos que hagan constar la imposibilidad de su existencia civil, se les han de conceder todos los derechos y goces de los vecinos del pueblo á que se agregan; y en la segunda parte hallo que los goces y derechos del pueblo agregado no serán comunes á los vecinos del pueblo á que se agrega. Esta es una desigualdad que repugna en nuestro actual sistema, y una injusticia que se hace al pueblo que carga con el que tiene imposibilidad de existir civilmente.

El Sr. **GOMEZ** (D. Manuel): Aunque he tomado la palabra en defensa de este artículo, estoy de acuerdo con el Sr. Melendez en las reflexiones que ha hecho, porque á la verdad no hallo la mayor exactitud en algunos términos con que está redactada su primera parte. La expresion «para sostener su existencia civil» es demasiado impropia y aun muy chocante: se sabe en los casos en que se aplica, y estos sin duda son muy diferentes del que se trata. Desearia, por tanto, que se suprimiese esta cláusula, y se sustituyera, si la comision lo tiene á bien, la de «representacion civil ó Ayuntamiento,» que dice lo mismo que se intenta y no choca tanto.

Por lo demas, yo no veo en la esencia del artículo la injusticia que ha hallado el señor preopinante. Se trata de que los pueblos que por no poder tener esta «representacion civil,» ó sea «Ayuntamiento,» se agreguen á otros, conserven los derechos, aprovechamientos y goces que les pertenecian antes de su agregacion, sin comunicarlos á aquel á que sean agregados. ¿Y dónde es-

tá aqui la injusticia? Esta se hallaria si se dispusiera lo contrario. ¡Ojalá que adoptada esta máxima por las Cortes, se generalizase en todos los pueblos de la Península, y así se evitarian los perjuicios que se originan de la promiscuacion de aprovechamientos, y especialmente de la mancomunidad de pastos! Hay pueblos muy pequeños que por su situacion local disfrutan terrenos de abundantes pastos, con los cuales podian tener medios, no solo para beneficiar sus ganados, sino tambien servirles de arbitrios para proporcionarse auxilios, atender á sus necesidades y pagar sus contribuciones. Pero ¿qué sucede? Que vienen á ser víctima de los poderosos del pueblo mayor, que ordinariamente ejercen un imperio tiránico sobre los naturales de un pueblo corto, y á pretesto de la mancomunidad introducen sus ganados en sus términos, y sobre no dejarles donde puedan andar los suyos, sufren estos infelices aldeanos los gravísimos daños de ver allanadas sus posesiones, atravesados y destruidos sus sembrados. Esto sí que es injusto y por desgracia muy frecuente. Evítese, pues, por las Cortes, y aprobando éstas el artículo en cuestion, resérvense á los pueblos que se agreguen á otros, los derechos, aprovechamientos y goces que les pertenezcan, para que exclusivamente usen de ellos con la misma libertad que cualquier otro propietario.

El Sr. **SOTOS**: No tengo dificultad en admitir la primera parte del artículo; pero la segunda me parece inadmisibile. No se trata en ella de los derechos personales que puedan tener los vecinos de un pueblo en virtud de propiedad particular, y si solo de los que les corresponden como á tales vecinos. Está bien que cuando un pueblo se halle atrasado en contribuciones ó las tenga adelantadas por suministros ó de otro modo, no entren á sufrir el pago de estos atrasos ni á participar del beneficio de los adelantos los vecinos de otro pueblo que de nuevo se les agregue, pues que estas obligaciones ó derechos se habian hecho ya personales antes de la reunion; mas no puede admitirse que una vez reunidos los pueblos y formando un solo vecindario, los derechos, aprovechamientos, goces y obligaciones de unos individuos como vecinos de aquel pueblo, sean distintos de los que tienen otros como vecinos del mismo pueblo. Esto envolveria una notoria desigualdad é injusticia, una anomalía extraña y muy embarazosa para el gobierno del pueblo, y una especie de contradiccion, porque seria decir que los vecinos de ambos pueblos formaban un solo vecindario y muchos vecindarios á un tiempo.

Esta cuestion está resuelta en cierto modo por la que se ventiló en la anterior legislatura tratando de los dos pueblos de Yébenes. Habiéndose hecho una proposicion para que cada uno de ellos conservase sus respectivos derechos, se demostró en la discusion la absoluta imposibilidad de que los derechos y obligaciones de los varios vecinos de un mismo pueblo fuesen entre sí distintos, y que estos solo podia tener lugar en cuanto á los derechos ú obligaciones, que habiendo vencido antes de la union, se habian hecho personales á cada uno de sus vecinos. En su consecuencia, dicha proposicion pasó á la comision, la cual dió su dictámen conforme á dichos principios, que fué aprobado por las Cortes.

Hallo además una impropiedad en la redaccion del artículo, que podrá producir dudas é injusticias. Estando á su letra los vecinos de un pueblo que se agrega á otro, pueden conservar algunos derechos, aprovechamientos y goces sin comunicarlos á sus nuevos vecinos, debiendo siempre participar de los que estos tengan, lo que seria una enorme desigualdad é injusticia. He

dicho que esta es una impropiedad en la redaccion del artículo, porque aunque esta es su letra, entiendo que es otra la mente de la comision. Así que, me opongo á este artículo por su fondo y por la manera con que está redactado.

El Sr. **BUEY**: Me parece que voy á suscitar una cuestion de palabras. Entiendo que en el lugar del adjetivo civil, debia decirse política. Porque un pueblo no pueda mantener un Ayuntamiento, no por eso pierde su existencia civil, sino su existencia política, y aun esta no la pierde absolutamente; pues un pueblo que se une á otro, no debe decirse con propiedad que queda agregado, sino refundido. Yo, contrayéndome á la cuestion, diré que no hallo justicia en que á un pueblo pequeño, que tiene buenos propios, se le obligue á entrar en comunidad con otro pueblo grande, que en pocas horas pueda agotarle todos sus arbitrios. La causa pública se interesa en esta separacion; porque si en el pueblo pequeño hay algunos vecinos que aprovechándose de los medios que les proporciona aquel terreno, llegan á aumentar sus intereses, podrán con el tiempo aumentar tambien la poblacion y los recursos que la Nacion puede sacar; y haciendo comunes estos bienes, se va á arruinar totalmente el que ya casi lo estaba.

El Sr. **VALDES** (D. Cayetano): Estamos ocupándonos de una cosa sobre que no há lugar á discutir, porque en los artículos anteriores se ha dicho ya que puedan incorporarse unos pueblos á otros cuando la conveniencia pública lo exija. A la última cláusula es á la que yo me opongo, porque puede infundir confusion. En el expediente que se formará, constarán todas las circunstancias, y no hay necesidad de decir nada. Así que, esta última cláusula es en mi concepto inútil, y debe retirarla la comision.

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: La comision está conforme en que se suprima la expresion «existencia civil,» y se diga «para sostener un Ayuntamiento.» En cuanto á la impugnacion de la última parte del artículo, el Sr. Sotos han indicado la razon que tuvo la comision para proponerlo, y es el decreto que en la próxima legislatura dieron las Córtes sobre el expediente de reunion de los Yébenes, que pido al Sr. Secretario se sirva leer: (*Le leyó*). Si yo hubiera de manifestar mi opinion particular, diria que estaba de acuerdo con los señores Melendez, Sotos y demás que han impugnado el artículo. Mi opinion es que verificada la reunion de dos pueblos, todo debe ser comun; pero la comision no pudo desentenderse de la órden que se acaba de leer. La comision que dió el dictámen para este expediente, no hablaba nada de esta reserva de derechos y aprovechamientos. Fué esta idea producida por una adiccion que tuvo una muy larga discusion, y se vino á parar al capítulo último de la Real órden, por el que se autorizó á las Diputaciones provinciales para que resolvieran las cuestiones que pudiera haber entre los pueblos que se habian de reunir, acerca de sus obligaciones y derechos. De consiguiente, no habiendo hecho la comision más que acomodarse en esta última parte á las resoluciones del Congreso, parece que llenaba su deber, del que no puede separarse retirando esta parte, como se ha pedido.

El Sr. **SOTOS**: El art. 8.º del decreto de Córtes que acaba de leerse, tiene otro sentido del que le da la comision. En él se autoriza á las Diputaciones provinciales para que por medios justos, equitativos y prudentes arreglen las diferencias y reclamaciones de los pueblos que se hayan de reunir, acerca de los derechos y

obligaciones de sus respectivos vecinos al tiempo de su reunion. Para decretarlo así, se tuvo presente que alguno de estos pueblos podria estar alcanzado con algunas obligaciones, ó bien tener derecho á ciertas indemnizaciones, que correspondiendo á tiempos anteriores á la reunion, debian recaer solo sobre los que habian pertenecido á aquel vecindario; y es claro que en este caso no deberian sufrir la carga de estas obligaciones, ni participar de las indemnizaciones los que nuevamente se reunian al mismo. Por eso se dice en el artículo que se oirán las reclamaciones acerca de los derechos y obligaciones de los respectivos vecinos al tiempo de la reunion; pero no se dice que conservarán distintos derechos, como habia pretendido el autor de la proposicion. Mas en el artículo que ahora se discute, se habla de derechos posteriores á la reunion, se habla de aprovechamientos y goces que en calidad de vecinos han de conservar algunos individuos sin comunicarlos á sus convecinos, lo cual en nada es conforme á lo decretado en la legislatura anterior, ni puede aprobarse, porque lleva consigo una notaria desigualdad é injusticia.»

Declarado el punto suficientemente discutido, dijo para votar

El Sr. **ALBEAR**: Precisamente la última cláusula de este artículo, que se ha impugnado, es adecuada á todas las provincias. En las montañosas tienen que reunirse varios pueblos para formar Ayuntamiento; mas no es lo mismo formar de varios pueblos uno, que tener un mismo Ayuntamiento, y en este sentido deben conservar los pueblos ciertos aprovechamientos, derechos y otros goces.»

En seguida, votado el artículo por partes, fué aprobado en las dos primeras, sustituyéndose á las palabras «su existencia civil,» la de «Ayuntamiento,» y la última parte, que empieza «sin comunicarlos etc.» fué desaprobada, debiendo por consiguiente suprimirse.

«Art. 73. Luego que se comunique á cada provincia el repartimiento hecho por las Córtes de las contribuciones que deba pagar, cuidará el intendente, con las oficinas de su ramo, de hacer el justo repartimiento del cupo que corresponda á cada pueblo, y lo pasará á la Diputacion provincial para que esta lo intervenga y apruebe si lo haya justo y equitativo.»

Leído este artículo, observó el Sr. *Romero* que debia decir «aprobado» en lugar de «hecho,» porque las Córtes no lo hacian, sino que lo aprobaban; y que tratándose en esta instruccion y capítulo de las Diputaciones provinciales, á ellas debia dirigirse el objeto de este artículo, sin mezclarse en él las atribuciones de los intendentes. La comision, estimando justas las observaciones del Sr. *Romero*, retiró el artículo para redactarle de nuevo.

«Art. 74. Aprobado el repartimiento, el intendente lo circulará á los Ayuntamientos de la provincia, y cuidará de su ejecucion, haciéndola llevar á efecto por los medios legales que estén establecidos.»

Tambien retiró la comision este artículo para redactarlo de nuevo, mediante haber manifestado el Sr. *Lopez del Baño* que existia para ello respecto de este artículo, la misma razon que respecto del anterior, pues que no se trataba de las atribuciones de los intendentes, sino de las de las Diputaciones provinciales.

«Art. 75. Lo prevenido en los artículos anteriores se observará tambien para el repartimiento de contribuciones extraordinarias, á menos que haya un método especial establecido por la ley, en cuyo caso tendrá la

Diputacion provincial aquella intervencion que determinen las Córtes.»

Leido este artículo, dijo

El Sr. **ROMERO**: En el párrafo primero del artículo 335 de la Constitucion, se dice: (*Leyó.*) De modo que terminantemente se previene que toca á las Diputaciones provinciales intervenir y aprobar el repartimiento hecho á los pueblos de toda clase de contribuciones, así ordinarias como extraordinarias, y por lo tanto resulta inútil la primera parte del artículo que se discute. La segunda parte no tiene objeto, porque debiendo anualmente las Córtes establecer las contribuciones é impuestos de un modo general y uniforme, interin no se altere lo que previene la Constitucion, las Diputaciones provinciales tendrán la intervencion que la misma señala.

El Sr. **GOMEZ BECERRA**: Esta disposicion está tomada de la instruccion de 23 de Junio de 1813, mas la comision reconoce su inutilidad y conviene en retirar este artículo absolutamente.»

En efecto quedó retirado.

«Art. 76. Toda queja ó reclamacion que hagan los Ayuntamientos sobre agravios en el repartimiento del cupo de contribuciones que haya cabido á sus pueblos, se dirigirá á la Diputacion provincial, la que sin perjuicio de que se lleve á efecto el repartimiento hecho, examinará maduramente la reclamacion, y lo confirmará ó reformará para la debida indemnizacion en el inmediato, todo sin ulterior recurso.»

Leido este artículo, dijo

El Sr. **MURFI**: Yo no veo la razon por que las Diputaciones provinciales, acudiendo á tiempo los pueblos agraviados, no han de poder rectificar en el mismo año cualquier error que cometan en el repartimiento de contribuciones. Si es porque no se entorpezca el cobro de ellas, esto se evita con señalar ocho ó diez dias para las reclamaciones; pues no es justo que ningun pueblo por ningun motivo contribuya sino en proporcion á sus haberes. Por lo tanto, yo opino que debe dejarse facultad á las Diputaciones provinciales para que rectifiquen en el mismo año, si se reclamare con tiempo, cualquier error.

El Sr. **SEOANE**: El Sr. Murfi halla injusto el artículo que se discute, porque creo que algunas veces podrán las Diputaciones provinciales remediar en el mismo año los agravios que resulten contra los pueblos. Yo por mí parte entiendo que por dos ó tres veces que esto pueda hacerse con tal prontitud que no se entorpezca el cobro de las contribuciones, habrá dos mil casos en que se entorpecerá, como se está experimentando en la actualidad; y con solo tener pendientes reclamaciones de esta especie, los Ayuntamientos no podrán llevar á cabo la cobranza de las contribuciones. Es necesario que tengamos tambien presente que el interés individual es muy sagaz, y que se aprovechará del pretexto de las reclamaciones de agravios para no pagar con la exactitud debida. Así que, este artículo debe aprobarse cual está, por las razones que he expuesto, por las mismas que ha indicado el Sr. Murfi, y por otras que omito por no molestar la atencion del Congreso.

El Sr. **VELASCO**: Siendo una de las atribuciones de las Diputaciones provinciales intervenir y aprobar el repartimiento hecho á los pueblos de las contribuciones que hubiesen cabido á cada provincia, no puedo concebir cómo se arregla á los principios de justicia el que sean las mismas las que decidan sobre las reclamaciones de los Ayuntamientos de los pueblos que se consideren agraviados por dicho repartimiento; porque sien-

do las Diputaciones provinciales las que le intervienen y aprueban, es consiguiente que han de tener interés en sostener su obra. Esto vendria á ser lo mismo que si en una queja contra cualquiera autoridad, se facultase al asesor de la misma para que resolviese. No siendo, pues, esto ni regular ni conveniente, debe la comision proponer otro medio ú otra autoridad á quien recurrir, no interesada en sostener lo hecho.

El Sr. **OJERO**: Son muy loables los descos manifestados por el Sr. Murfi acerca de que se remedien en el mismo año los agravios que se reclamen por los pueblos en tiempo oportuno; pero si se abriese esta puerta, serian mayores las injusticias, é impracticables las operaciones que resultarían. Hecho el repartimiento por la Direccion de contribuciones, se pasa á la Diputacion provincial; y ésta, previos todos los informes y conocimientos que tiene por conveniente, lo aprueba ó desapruéba. Una vez aprobado, tiene que comunicarse por el intendente á los Ayuntamientos, á fin de que hagan efectivas las cuotas respectivas; y si en este estado se admiten reclamaciones de agravios y se resuelven favorablemente por las Diputaciones provinciales, habrá que deshacer todas las operaciones muchas veces, y el resultado será que irá en aumento esa suma enorme de atrasos de contribuciones. Así que, es conveniente que estos agravios se indemnizen en el año siguiente; y aun así se siguen algunos inconvenientes, porque los pueblos, que no entran en indagaciones de la razon de la disminucion, se resienten al comparar lo que pagaron en el año anterior y lo que pagan en el presente cada uno con lo que él contribuye; y si algun temperamento pudiera tomarse, sería el de que presentado al público el repartimiento, se admitiesen por ocho dias las reclamaciones, aunque entonces tal vez no habria pueblo que no entablase su recurso de agravio.

En cuanto á la observacion del Sr. Velasco sobre que no deben ser las Diputaciones provinciales las que entiendan en la decision de estas reclamaciones, porque vienen á ser jueces y parte, yo preguntaré á S. S.: ¿á quién se ha de acudir? Porque si es al Gobierno, el Gobierno tendrá que estar á lo que informen las mismas Diputaciones provinciales: además de que yo creo que no debe hacerse á estas la injusticia de que se empeñen en sostener errores que tal vez podrán ser materiales ó de cálculo ó pluma.

El Sr. **GOMEZ** (D. Manuel): No insistiré en el argumento del Sr. Velasco, que yo considero en pie á pesar de lo que acaba de contestar el Sr. Ojero: en lo que sí insisto es en oponerme á que se deje para el año siguiente la reparacion de cualquier agravio que se haga presente y justifique con tiempo, porque considero sumamente injusto y nada conforme á los principios constitucionales el que los pueblos paguen más de lo que corresponde á sus haberes; y puede acontecer que, no reparándose el agravio en el año, queden arruinados y sin subsistencia por esta causa algunos de sus individuos. Tengan los pueblos el consuelo de que si por alguna parte un error involuntario ha ocasionado el que se les cargue más de lo justo, por otra una mano benéfica repara esta injusticia.

Concluyo manifestando que no apruebo tampoco la última cláusula de este artículo, que dice «todo sin ulterior recurso,» porque me parece demasiado duro y fuerte que una autoridad sea la que sancione el reparto, la que oiga las quejas contra él, la que decida estas y la que eche el sello irrevocable.

El Sr. **VALDES** (D. Cayetano): El artículo está co-

mo debe estar; y de no estar así, es necesario renunciar á él. Los señores que lo impugnan, deben hacerse cargo de que las contribuciones se reparten á un mismo tiempo para todos los pueblos, y fijado ya el reparto, no puede hacerse novedad á no deshacer todas las operaciones anteriores. En cuanto á que no deben ser las Diputaciones provinciales las que oigan y decidan las reclamaciones de agravios, porque se las considera como jueces y parte, es necesario hacerse cargo de que cualquier error que cometan, como que no es error de intencion ó de voluntad, no les importará nada el des-hacerle, por cuanto tampoco les para ningun perjuicio.

Por lo que hace á lo que ha indicado el Sr. Gomez, de que si no se repara inmediatamente el agravio, puede quedar arruinado ú oprimido un pueblo, es necesario tener en consideracion que las equivocaciones ó errores en estas materias no son tan enormes que puedan causar tales daños; son de corta entidad y dan lugar á esperar al año inmediato. Así que, yo entiendo que el artículo debe aprobarse cual se propone. »

Dióse el punto por suficientemente discutido, y á petición del Sr. *Ayllon* se leyó el art. 29 del decreto de 13 de Setiembre de 1813; pero el Sr. *Gomez Becerra* advirtió que este decreto hablaba de la contribucion directa establecida por las Córtes generales y extraordinarias, la cual era muy diferente de la que hoy existe. En seguida se votó el artículo por partes, y fueron aprobadas las dos en que al efecto se dividió.

Se leyeron y mandaron pasar á la comision las dos adiciones siguientes.

Del Sr. *Arias* el art. 63 del proyecto:

«Para evitar las competencias que pueden seguirse entre los Ayuntamientos y gobernadores de las plazas en estado de sitio, á quienes por el art. 11, cap. XXII, aprobado por las Córtes, de la ordenanza del ejército, se les confia, no solo el régimen interior de los cuerpos militares, etc., sino tambien el gobierno de policia de la plaza para mantener el buen orden, con exclusion de las autoridades civiles; y perteneciendo á estas por el citado art. 63, igualmente aprobado, cuidar de todos los demas objetos que les estan encomendados por las leyes, reglamentos ú ordenanzas municipales, pido que despues de las palabras «con todo lo que no se oponga á la presente instruccion» se añada: «y á las órdenes y disposiciones que den los gobernadores militares cuando el pueblo se declare en estado de sitio.»

Del Sr. *Escudero* al art. 71:

«La mayor parte de los pueblos de la provincia de Pamplona no comprenden cada uno 50 vecinos, y tuvieron sin embargo casi todos de tiempo inmemorial su Ayuntamiento peculiar, con absoluta independencia de unos con otros. Para que conserven este goce, mejorado con lo establecido por la ley fundamental y decretos de las Córtes sobre Ayuntamientos constitucionales, propuso la Diputacion de dicha provincia al soberano Congreso, en representacion de 23 de Marzo de 1821, ciertas modificaciones análogas á la Constitucion de la Monarquía, utilísimas á la conveniencia de aquellos naturales y aun á los de otras provincias semejantes en la corteza de vecindario de las poblaciones á la de Pamplona.

Pido á las Córtes que se sirvan tomar en consideracion la indicada instancia de la Diputacion de la provincia de Pamplona y acceder á lo que en ella se solicita.»

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despacho de Marina, haciendo presente haberse ofrecido la duda de si en el decreto de las Córtes ordinarias de 27 de Abril del presente año, que trata de las causas en que deben entender provisionalmente los capitanes de puerto en sustitucion de los comandantes militares de marina de las provincias, pudo palearse la equivocacion involuntaria de expresar de *pescu* en lugar de *presas*, puesto que en la Real orden de 2 de Febrero anterior, relativa al particular, se dice «causas de naufragios y presas,» pudiéndose inferir de esto que la diferencia que se nota la produjese un error de pluma. Las Córtes acordaron que este oficio pasase con los antecedentes á la comision de Marina.

Para esta nombró el Sr. *Presidente* al Sr. *Gener* en lugar del Sr. *Abreu*.

Anunció el Sr. *Presidente* que mañana continuaria la discusion que hoy habia quedado pendiente, del proyecto de instruccion para el gobierno económico-político de las provincias.

Se levantó la sesion.